

*La segunda encuesta ha sido dirigida a los canonistas que pertenecen al escalafón de Catedráticos de la Universidad estatal española. Todos ellos son Catedráticos de Derecho Canónico. Estas son las opiniones recibidas.*

# Encuesta a Catedráticos de Derecho Canónico

## PREGUNTAS

1. Hecha abstracción de los ministerios propios del *ordo clericorum* y de la capacidad para recibir el sacramento del orden, cuestiones que quedan fuera de esta encuesta, ¿cree Vd. que es justo establecer diferencias entre los varones y las mujeres en lo que atañe a los derechos, deberes, funciones, etc., que corresponden o pueden desempeñar los laicos en virtud de su condición de tales?
2. Supuesto que el m. p. «Causas matrimoniales» admite la posibilidad de que un laico forme parte de órganos judiciales, ¿le parece justo negar esa posibilidad a las mujeres, siempre que cumplan los mismos requisitos de competencia profesional, moralidad, etc., que se exige a los varones?

## Alberto Bernárdez Cantón

*Universidad de Sevilla*

1. Quisiera comenzar mi respuesta con algunas puntualizaciones.

1.º Dejar bien sentado que el Derecho canónico ha constituido un poderoso ingrediente en el proceso de la indiscriminación jurídica de los sexos. Por ello creo que es importante sustraerse al movimiento exacerbadamente feminista que ha llegado a acusar a la Iglesia de retrógrada y poco menos que culpable de la postergación que sociológica e históricamente ha podido envolver a la mujer. La historia de la Iglesia sería sobradamente elocuente en destacar la falsedad de la acusación de antifeminismo en la Iglesia y en poner de relieve el papel que la mujer ha desempeñado en la transmisión de la fe y en las reformas de la Iglesia. A veces, lo que pudiera constituir un desigual tratamiento jurídico en el fondo puede obedecer a medidas de favor o tutela de quien, de hecho, se encontraba necesitado de protección. Sin negar que en ocasiones el Derecho canónico pueda haberse dejado influir por principios del Derecho secular en que la mujer recibía un trato desfavorable en relación con el varón.

2.º Hay también que aclarar que no toda desigualdad jurídica repercute en desventaja para la mujer. Así por ejemplo, cuando el Derecho canónico permite a la mujer contraer matrimonio dos años antes de lo que se le permite al varón está reconociendo en la mujer una más precoz adquisición de aquella madurez de juicio necesaria para la aceptación del matrimonio. Y si repasamos el famoso elenco de las causas matrimonia-

les, comprobaremos que en buena medida eran aplicables preferentemente en favor de la mujer. La misma mención que del sexo hace el canon 2218 entre las circunstancias a tener en cuenta para la equitativa imposición de las penas, se resuelve en una especial consideración hacia la mujer.

3.º La misma formulación de la pregunta —que acaso en su contexto sea algo sugerente— necesita alguna matización. Habría que preguntar cuáles son los criterios o valores para deducir la justicia o injusticia de una norma establecida. Pues junto a las exigencias de un derecho fundamental o de una justicia material habrá de reconocer al legislador la posibilidad de tener en cuenta otras razones —de conveniencia, idoneidad, aptitud, prudencia— a la hora de legislar particularmente en materia de estructuras sociales y funciones públicas. Y ello, también habida cuenta de circunstancias históricas especiales.

Después de estas consideraciones, la respuesta concreta brota por sí misma. Abstracción hecha de los ministerios del *ordo clericorum*, como establece la misma encuesta, hay que afirmar que no toda diferenciación jurídica por razón del sexo tiene por qué redundar en perjuicio de la mujer ni ha de ser automáticamente tachada de injusta. Unas diferencias pueden obedecer a razones simplemente naturales; la relación madre-hijo se deduce del hecho evidente del parto, la paternidad está regulada por sólidas presunciones. Puede haber un principio o exigencia social que imponga cierta desigualdad; así la unidad familiar puede exigir que, sin perjuicio de la igualdad de los cónyuges en el concierto matrimonial, la mujer tenga como domicilio legal el que lo sea del marido. Las especiales

características del sexo femenino pueden hacerle más idóneo para que se le encomiende una determinada forma de apostolado, una determinada función eclesial, o que se le autorice una especial forma de espiritualidad. El ambiente social o el grado de desarrollo de una comunidad, puede determinar el que se acepte más fácilmente al hombre o a la mujer para una determinada función y encontrar chocante que se encomiende al sexo contrario. Salvando estos matices, atendibles especialmente cuando se trata de atribuir funciones eclesiales, es lógico que haya de reconocerse igual condición al hombre y a la mujer dentro de la vida de la Iglesia y del Derecho canónico. La paulatina conquista de la mujer en los diversos órdenes —social, laboral, cultural, jurídico, político, etc.— que la definen como protagonista de empresas que trascienden el tradicional marco familiar y como portadora de iniciativas en el orden social puede hacer progresivamente innecesarias muchas matizaciones.

2. También aquí puede resultar un tanto tajante calificar, sin más, de justa o injusta, una situación. Hay que advertir el carácter restrictivo y excepcional con que el M. P. admite la incorporación de laicos al Tribunal colegiado. De los tres miembros que componen el Tribunal colegiado, sólo uno de ellos puede ser laico, cuando no fuese posible encontrar tres clérigos en condiciones de tiempo o de preparación para constituir el Tribunal. Hasta el punto de que si no fuese posible encontrar más que un clérigo el M. P. prefiere que se constituya éste en Juez único antes que incorporar los laicos al Tribunal colegiado. Parece como si se tendiera a evitar la hipótesis de que una causa pudiera resolverse por el voto

mayoritario de los laicos en contra del voto del Juez clérigo. Según esto hay que pensar que la potestad judicial atribuida al laico no es plena o equiparable a la reconocida al clérigo, pues en punto a la decisión de un conflicto lo máximo que se le concede es que pueda sumarse a uno de los votos de los clérigos cuando éstos fuesen discrepantes.

Cierto que esta consideración no resuelve la cuestión formulada; pero puede ayudar a encauzarla. En fin de cuentas, se dirá, aunque fuese con el mismo carácter restrictivo se podría haber reconocido la misma facultad en favor de la mujer. Podríamos aventurar varias razones por las que el legislador no haya mencionado a la mujer a la hora de incorporar a los laicos al Tribunal eclesiástico colegiado. Una razón de carácter doctrinal para no prejuzgar el problema de si la mujer es capaz de adquirir potestad de jurisdicción en sentido propio. Una razón de carácter ambiental o sociológico dada la escasa medida en que la mujer interviene en la Administración de la Justicia en la mayoría de los países, siendo así que la disposición pontificia es de carácter universal. Acaso una razón de tipo prudencial para evitar que el litigante o los testigos varones pudieran sentirse cohibidos a la hora de declarar ante un juez femenino, por explicable motivos de pudor y obsequio hacia este sexo, en materia vidriosa tan frecuente en pleitos matrimoniales. Estas mismas reacciones de pudor y respetabilidad podrían darse en el mismo seno de las sesiones de un Tribunal colegiado constituido por personas de diverso sexo. El caso inverso, el de la mujer declarando ante juez varón (que argüiría algún feminista a ultranza) no representa

una auténtica dificultad, pues la práctica atestigua que la mujer normalmente no se siente especialmente angustiada al exponer problemas íntimos al profesional varón. Acaso porque sea más dócil y más espontánea. Es cierto que este tipo de razones se atenúa por el hecho de que el mismo M. P. concede a la mujer un puesto en la organización judicial cuando la admite para el oficio de Notario, pero también hay que reco-

nocer que aquellas razones tienen más consistencia en el caso del ministerio judicial dadas las diferencias entre la función judicial y la función notarial. Finalmente hay que tener en cuenta que el aludido M. P. tiene mucho de progresivo —y de experimental posiblemente— por lo que bien pudiera ocurrir que el legislador se hubiera contentado inicialmente con introducir su reforma en aquellos comedidos términos.

## Lamberto de Echeverría

*Universidad de Salamanca*

1. No ahora, cuando todo parece en trance de revisión, incluso la misma incapacidad de la mujer para la potestad de orden, sino siempre me pareció enteramente artificiosa la construcción que se hacía de una potestad de jurisdicción a la que no tenía acceso la mujer. Tal idea se debía, a mi juicio, bien claramente a su asociación con la potestad de orden. Esto obligaba a recurrir a la «potestad dominativa pública», retorcida explicación para dar una salida a lo que no la tenía.

Por decirlo con un ejemplo concreto: Una decisión tomada por el General de los Camaldulenses de Monte Corona que obligue en las ocho casas donde se hallan los 85 religiosos que componen la Congregación, es acto de jurisdicción que afecta a la vida de la Iglesia, y tiene carácter público. Pero si la decisión la toma la General de las Hijas de la Caridad para sus 44.000 religiosas que

habitan las 3.886 casas de la Congregación, esta es una manifestación tan sólo de su potestad dominativa, trabajosamente admitida como pública en tiempos bien recientes. Confieso no haber entendido nunca la diferencia. Ya en 1946 y escribiendo sobre el caso de la abadesa de las Huelgas insinué que una revisión de estos conceptos «hubiera podido contribuir a aclarar posiciones» (REDC. 1, 1946, p. 230).

2. La intervención de mujeres en los órganos judiciales me parece, no sólo posible, sino también conveniente. Para llevarla a la práctica convendría animar a nuestras alumnas a ejercer como abogados buscando preferentemente asuntos matrimoniales, con lo que de servicio a las mujeres pleiteantes tendría su intervención. Y una vez que así su presencia en los tribunales eclesiásticos se hiciera habitual y su competencia manifiesta, se les podría dar acceso como jueces. Siempre, claro está que, como se dice en la pregunta «cumplan los requisitos de competencia profesional, moralidad, etc., que se exigen a los varones». Pero no más que a éstos.



## Alberto de la Hera

*Universidad de Madrid*

1 y 2. En un reciente y profundo estudio acerca de los derechos fundamentales de los fieles, y al enumerar éstos, Pedro Juan Viladrich incluye expresamente el «derecho a participar activamente en la vida y fines de la Iglesia», precisando a renglón seguido que «en el marco genérico de este derecho, deben comprenderse cuantos afectan a la vida comunitaria y a los fines eclesiales. Así, *el derecho a participar en las celebraciones litúrgicas, derecho a colaborar con la actividad apostólica de la jerarquía, el derecho a asumir cargos eclesiásticos*»<sup>1</sup>. El mismo autor, siguiendo la doctrina del Concilio Vaticano II<sup>2</sup>, define al fiel como «todo hombre que, incorporado a Cristo por el bautismo, pertenece al pueblo de Dios»<sup>3</sup>; y cuando se nos dice «todo hombre», lógicamente hemos de entender toda persona humana: «la condición de fiel presupone la condición de persona humana, la llamada conformante de Dios a la salvación y la respuesta del hombre»<sup>4</sup>; «de todas las gentes de la tierra se compone el Pueblo de Dios, porque de todas recibe sus ciudadanos... Pues todos los fieles esparcidos por la faz de la tierra comunican en el Espíritu Santo con los demás»<sup>5</sup>.

La total equiparación entre hombre y mujer, en cuanto fieles, que esta doctrina da por establecida, no es ni tan pacífica ni tan recibida como podría suponer un lector poco conocedor de los datos que nos ofrece la realidad histórica. Salvo pueblos muy concretos es sabido que la mujer tuvo en la antigüedad una consideración de inferioridad respecto al hombre; Aristóteles la tenía por un «varón frustrado»<sup>6</sup> y en el pueblo judío la superioridad del varón había calado muy hondo en las leyes y en la vida<sup>7</sup>. En tales condiciones, la Iglesia contribuyó a devolver a la mujer su dignidad parigual al hombre<sup>8</sup>.

Pero si esa reivindicación de la mujer, que la sitúa en igualdad con el varón para toda la historia posterior, es mérito del cristianismo, hay que señalar que la historia nos presenta también en el seno de la propia Iglesia una cierta contradicción: en su organización y en su derecho la mujer está muy distante de haber obtenido nunca una condición paritaria con la otorgada al hombre. Posiblemente es consecuencia de que, históricamente, la mujer cristiana ha llegado a conformarse sobre todo como «madre» incluso por encima de como «esposa»<sup>9</sup> y que las «virtudes domésticas» han aprisionado a la mujer allí mismo donde se ha tratado al hombre con generosa indulgencia; en fin, el resultado ha sido que queda-

1. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel*, Pamplona, 1969, p. 396. El subrayado es del autor.

2. Constitución *Lumen Gentium*, nn. 9-14.

3. VILADRICH, ob. cit., p. 313.

4. VILADRICH, ob. cit., p. 305.

5. Constitución *Lumen Gentium*, n. 13. Utilizo para el texto castellano la edición de la B. A. C., *Concilio Vaticano II*, Madrid, 1965, p. 30.

6. En *De generatione animalium*, lib. 2, c. 3; vid. la referencia en METZ, *Recherches sur le statut de la*

*femme en droit canonique, bilan historique et perspectives d'avenir. Problèmes de méthodes*, en "L'Année Canonique", XII, 1968, p. 104.

7. Cfr. METZ, ob. cit., pp. 93-95.

8. Cfr. BIONDO BRONDI, *Il diritto romano cristiano*, Milán, II, 1952, pp. 209-228; III, 1954, pp. 1 y ss.

9. Puede recordarse, de paso, el influjo de estas ideas en la concepción misma de la sociedad conyugal, presentada tantas veces con olvido de que quienes la constituyen son solamente los esposos aunque esté ordenada a los hijos por su propia naturaleza.

se la mujer apartada de aquellos mismos derechos que han constituido el estatuto jurídico, no ya del fiel, sino tan sólo del varón en la Iglesia.

El Derecho canónico ha sido particularmente sensible a esta situación. Por ejemplo, aunque la mujer en algunos casos raros ha desempeñado funciones de gobierno, siempre ha sido por vía excepcional, salvo en lo que hace a la dirección interna de las órdenes religiosas femeninas, registrando la historia diferentes excepciones más curiosas que otra cosa y que sobresalen más por su propia singularidad<sup>10</sup>.

Todo lo anterior conduce a una respuesta obligada a la pregunta que se me formula. Quiero hacer hincapié en el uso, en el texto de la pregunta, de la expresión «es justo». No debe tomarse a la ligera esa alusión a la justicia; responder que no es justo, simplemente, el establecer diferencias entre varón y mujer, pudiera sonar a mera razón de posibilidades, capacidades, requisitos, de la mujer para desempeñar determinadas tareas, en el sentido que a primera vista tiene la segunda de las preguntas formuladas. Y no es nada de eso, o, mejor es mucho más que eso. La igualdad hombre-mujer es una exigencia radical de la justicia, y sólo desde esta afirmación podemos entender toda la doctrina cristiana sobre la persona humana amén de las tesis del Vaticano II sobre el Pueblo de Dios.

Aunque la pregunta primera que se me formula hace abstracción expresa del tema de

los ministerios propios del *ordo clericorum* y de la capacidad para recibir el sacramento del orden, no sería totalmente coherente con mi planteamiento, si no aludiese también a este punto. Javier Hervada ha distinguido con particular claridad entre clerecía y jerarquía: es preciso, escribe «establecer una ruptura (en el sentido de una no identidad) entre clerecía y jerarquía... en el sentido de no confundir los ministerios jerárquicos (repetimos una vez más, en sentido jurídico, no teológico) con los ministerios clericales. Pues la jerarquía dimana de ciertos oficios o ministerios y algunos de ellos no exigen el sacramento del orden (v. gr. muchos oficios vicarios), un fiel no ordenado puede desempeñarlos y, por tanto, ser jerarquía en sentido jurídico, sin ser clérigo. Pertenece, desde luego, a la organización eclesiástica y a la jerarquía, mas no a la clerecía»<sup>11</sup>; «de no menor importancia es no perder de vista que la jerarquía —en sentido jurídico— es una *auctoritas* o *potestas* que se tiene en cuanto se es titular de un ministerio y dentro de las funciones del ministerio»<sup>12</sup>, «nada impide ser jerarquía en unos ámbitos y ser simple fiel en otros. Jerarquía es el laico que es provisor o juez delegado en el momento de dictar sentencia en la causa de un clérigo; y es simple fiel cuando recibe la absolución sacramental de ese mismo clérigo. Prelado es el papa; pero simple fiel ante el presbítero que le administra el viático o la absolución»<sup>13</sup>.

10. Vid. METZ, ob. cit., p. 110, con la bibliografía allí citada. Para el caso concreto que este autor cita con relación a España, basándose solamente en la *España Sagrada* del P. Flórez, existe un estudio moderno mucho más completo: ESCRIVÁ DE BALAGUER, *La Abadesa de las Huelgas*, Madrid, 1949.

11. HERVADA-LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona, 1970, p. 371.

12. HERVADA, ob. cit., p. 371.

13. HERVADA, ob. cit., pp. 372-373.

Dado que Hervada ha puesto precisamente el ejemplo del juez y ha hablado de laico y de fiel —hombre y mujer— la contestación al tema que se me propone la puedo dar con sus mismas palabras: dentro de la Iglesia no hay ningún ministerio jerárquico —en sentido jurídico— de los que no presuponen la participación en el sacerdocio ministerial, que no pueda ser atribuido a la mujer, supuestas capacidad y competencia, que son términos que hacen referencia a

cómo desempeñará la tarea encomendada, no a si puede encomendársele. Y no hay razón hoy en día para tomar siquiera en consideración las dudas sobre capacidad y competencia.

Por lo que hace a aquellos casos en que una función jerárquica implique una previa base clerical —la recepción del sacramento del orden en alguno de sus grados— el tema ya queda efectivamente fuera de esta respuesta.

## Javier Hervada

*Universidad de Navarra*

1. No, no es justo. Cuanto se predica de los laicos, en lo que atañe a sus derechos y deberes fundamentales (vid. P. J. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Pamplona, 1969; J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona, 1970, págs. 267 ss.), se predica por igual de varones y mujeres. Al respecto escribe DEL PORTILLO: «Ningún derecho, deber o facultad jurídica peculiar tiene la mujer —como laico en la Iglesia— distinto de los que se han venido enumerando, sea al tratar del estatuto jurídico de los fieles en general como de los laicos en particular. Sin embargo, parece necesario poner de relieve que tampoco carece de ninguno de ellos.

»'La más alta razón de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión con Dios' (GS, 19 a). Por eso, esa dignidad es común a varones y mujeres. Ade-

más ya hemos repetidamente recordado que en la Iglesia hay, entre todos los miembros del Pueblo de Dios, una radical igualdad en cuanto a la dignidad y la participación activa en la edificación del Cuerpo de Cristo, puesto que en el Pueblo mesiánico, todos, hombres y mujeres, 'tienen por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios' (LG, 9 b).

»Todo lo cual indica, sin necesidad de más paráfrasis, que la mujer goza en la Iglesia de una verdadera igualdad jurídica, sin ningún género de inferioridad respecto al hombre. Y esto es así, por Derecho divino, natural y positivo. Solamente creemos que deberá mantenerse la diferencia en cuanto a la capacidad para recibir órdenes sagradas. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de una desigualdad en el orden de la situación jurídica personal —plano fundamental de igualdad de los fieles—, sino exclusivamente en relación con determinadas funciones (plano de misiones eclesiales). Lo cual, por lo demás, no proviene de una entitativa menor dignidad ni de una desigualdad radical (¿fue la Virgen entitativamente

menos digna o radicalmente inferior a los Apóstoles o a los cristianos varones?), que ni existe en el plano de la naturaleza ni menos en el de la gracia, porque 'no hay, pues, ninguna desigualdad en Cristo y en la Iglesia —ni por la raza o nacionalidad, ni por la condición social o por el sexo—, porque *no hay ni judío ni griego; no hay esclavo ni hombre libre; no hay ni varón ni mujer. Pues todos vosotros sois 'uno' en Cristo Jesús* (Gal. 3, 28 gr.; cfr. Col. 3, 11)' (LG, 32 b).

«En la Iglesia *non est masculus neque femina*, lo que jurídicamente quiere decir que en el orden de los derechos que competen a los fieles por su condición de miembros del Pueblo de Dios, por el carácter bautismal y por ser una persona humana, el sexo no tiene la más mínima relevancia.

»Sería, sin embargo, poco objetivo afirmar que de hecho la mujer ha alcanzado dentro de la Iglesia aquella *paritas de iure et de facto cum viris*, cuya consecución señala la Const. *Gaudium et Spes* (n. 9 b) como uno de los signos de nuestros tiempos. Pese a que la proclamación de la dignidad de la mujer ha sido obra de la Iglesia, no es aventurado afirmar que existe una desigualdad fáctica, una discriminación de hecho, que responde a una resistencia a que la mujer ocupe plenamente el puesto que en el desarrollo de la Iglesia le compete. Muchas veces de modo inconsciente, otras veces con apoyo en falsas razones, y todo ello con la mejor intención.

»Si pensamos, por ejemplo, en la esfera de la cultura y formación universitaria ¿cuántas Facultades de ciencias sagradas autorizarían la presencia de la mujer en su profesorado? Y sin embargo, ya se ha indicado que existe una verdadera facultad del laico —y por tanto de la mujer— para la realización

de esas tareas docentes. En ésta una discriminación que, en principio —de no concurrir graves razones especiales de carácter circunstancial—, puede censurarse con palabras del mismo Concilio Vaticano II: 'Toda forma de discriminación, ya sea social o cultural, en los derechos fundamentales de la persona, por el sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, ha de ser superada y rechazada como contraria a los designios de Dios. Es verdaderamente doloroso que estos derechos fundamentales de la persona todavía no sean respetados íntegramente en todas partes. Como cuando se niega a la mujer la facultad de elegir libremente esposo y de abrazar un estado de vida, o la de llegar a igual grado de educación y de cultura que se le reconoce al hombre' (GS, 29 b).

»Sería pues conveniente, y responde plenamente a la mente del Concilio, que se garantice a la mujer el ejercicio en la Iglesia de todos aquellos derechos y facultades que le competen por su calidad de fiel, de miembro del Pueblo de Dios, y como laico: entre ellos el derecho de asociación y de gobierno autónomo de sus asociaciones, derecho a la enseñanza, facultades de consejo a todos los niveles de la organización eclesial, facultades en relación con la administración de bienes eclesiales, etc... Es decir, la plena igualdad jurídica con los laicos varones. Con ello, la Iglesia podría ser también en este punto testimonio y signo del plan divino, que se revela en esa señal de nuestro tiempo que la Const. *Gaudium et spes* expone como una de las aspiraciones más universales del género humano: 'Las mujeres reclaman para sí, donde todavía no lo han conseguido, la igualdad de derecho y de hecho con los hombres' (n. 9 b).

«Esta igualdad, sin embargo, ha de realizarse a través del desarrollo de las capacidades y características peculiares del hombre y de la mujer, sin pretender llegar a una uniformidad que sería destructora de la verdadera personalidad de cada uno» (A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona, 1969, págs. 277 ss.).

Así lo pide el principio de igualdad proclamado por el Concilio Vaticano II (L. G., 32); otra cosa son excusas o interpretaciones falseadas de ese principio (cfr., para un caso reciente, P. J. VILADRICH, *La declaración de derechos y deberes de los fieles*, en REDACCIÓN IUS CANONICUM, «El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia», Pamplona, 1971, págs. 213 ss.).

La Const. *Lumen gentium* habla claramente de igualdad en la dignidad y en la *acción común* (aquellas actividades, pues, que no se fundan en la distinción clérigos-laicos). Luego a todo cuanto es admitido el laico en virtud de su condición, tiene el mismo derecho a ser admitida la mujer.

Esto en lo que se refiere a la cuestión de Derecho, de capacidad jurídica. Cosa distinta es que de hecho haya actividades para las que, en general, las mujeres o los varones sean menos aptos en virtud de sus características típicas. Pero eso no debe afectar a la normativa jurídica. Lo mismo que ocurre en la sociedad civil, la propia vida se encarga de que se produzca la selectividad y la polarización de varones y mujeres hacia aquellas actividades sociales más adecuadas a las propias características.

Respecto a este tema ha dicho Mons. Escrivá de Balaguer: «Desarrollo, madurez, emancipación de la mujer, no deben significar una

pretensión de igualdad —de uniformidad— con el hombre, una *imitación* del modo varonil de actuar: eso no sería un logro, sería una pérdida para la mujer: no porque sea más o menos que el hombre, sino porque es distinta. En un plano esencial —que ha de tener su reconocimiento jurídico, tanto en el derecho civil como en el eclesiástico— si puede hablarse de *igualdad de derechos*, porque la mujer tiene, exactamente igual que el hombre, la dignidad de persona y de hija de Dios. Pero a partir de esa igualdad fundamental, cada uno debe alcanzar lo que le es propio; y en este plano emancipación es tanto como decir posibilidad real de desarrollar plenamente las propias virtualidades: las que tiene en su singularidad, y las que tiene como mujer. La igualdad ante el derecho, la igualdad de oportunidades ante la ley, no suprime sino que presupone y promueve esa diversidad, que es riqueza para todos.

»La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que le es propio y que sólo ella puede dar: su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad... La feminidad no es auténtica si no advierte la hermosura de esa aportación insustituible, y no la incorpora a la propia vida. Para cumplir esa misión, la mujer ha de desarrollar su propia personalidad, sin dejarse llevar de un ingenuo espíritu de imitación que —en general— la situaría fácilmente en un plano de inferioridad y dejaría incumplidas sus posibilidades más originales» (*Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer*, n. 87, 6.<sup>a</sup> ed., Madrid 1970, págs. 165 s.).



Tampoco lo que he dicho va en contra de que también en la Iglesia tenga su reflejo la complementariedad varón-mujer. A Cristo le asistían con sus bienes algunas mujeres y los apóstoles, según cuenta San Pablo, siguieron una costumbre parecida. Mas todo esto son hechos, vida, perfectamente conjugables con la igualdad jurídica entre el varón y la mujer. El principio de justicia —de estricta justicia— es claro: todo cuanto se predica del laico, como propio de su condición de bautizado (derechos, deberes, facultades, capacidad, etc.), se predica por igual de varones y mujeres.

2. Vista mi respuesta anterior, es claro que —en línea de principio— no me parece justo que no se admita a las mujeres a la función judicial. No tiene una clara explicación, ni de Derecho, ni de hecho. No la tiene de Derecho por lo ya dicho; no la tiene de hecho porque hay mujeres que se dedican profesionalmente al Derecho canónico y poseen títulos académicos más que suficientes. Por lo demás, hay ya muchas mujeres que son jueces de Tribunales del Estado y han demostrado la misma capacidad que los varones. Ni se piense en los

tiempos modernos. He aquí lo que nos narra el libro de los Jueces: «Vivía en aquel tiempo Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual regía al pueblo. Y sentábase debajo de una palmera, que se llamó de su mismo nombre, entre Rama y Betel, en el monte de Efraím; y los hijos de Israel acudían a Débora en todos sus litigios» (Jue. 4, 4-5).

Espero que en este caso no haya tenido nada que ver la antigua polémica sobre si la mujer podía tener o no jurisdicción en la Iglesia (en sentido afirmativo, vide el documentado estudio de J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, *La Abadesa de las Huelgas*, Madrid, 1949). La tesis negativa sólo tiene sentido en el contexto de una mentalidad estamental y, por tanto, la discusión no es hoy ni siquiera planteable, como no lo son otras discusiones análogas que tuvieron lugar en su momento: si es lícita la esclavitud, si debe o no condenarse a muerte a los herejes, si la mujer es un ser inferior al varón, o si la Iglesia tiene el *ius gladii*.

Puesto en claro el principio, se impone el respeto al legislador. Seguramente ha tenido en cuenta razones prudenciales que no se nos alcanzan. Sólo nos resta desear que esas razones desaparezcan pronto.

## Pedro Lombardía

*Universidad de Navarra*

1. Se trata de una cuestión que, a mi juicio, ha sido zanjada de manera inequívoca

por el Concilio Vaticano II. El Sínodo Ecu­ménico ha enseñado que existe una común dignidad de todos los fieles, que excluye cualquier desigualdad en razón de la estirpe, nación, condición social o sexo<sup>1</sup>. Por otra parte, esta doctrina se pone explícita-

1. "Unus est ergo Populus Dei electus: unus Dominus, una fides, unum baptisma (Eph. 4, 5); communis



mente en relación con la diferencia entre el sacerdocio común y el ministerial<sup>2</sup> en un texto<sup>3</sup> que sólo puede interpretarse en un sentido: el principio de igualdad no puede tener otras excepciones que las derivadas de la distinción entre los dos modos de participación en el Sacerdocio de Cristo. Por tanto, me parece evidente que cualquier discriminación de la mujer en cuanto a sus derechos en la comunidad eclesial, que no se fundamente en la diferencia entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, sería incongruente con lo que el Magisterio eclesiástico nos enseña sobre el designio de Cristo acerca de su Iglesia; es decir, sobre la Constitución divina del Pueblo de Dios.

## 2. La exclusión de las mujeres de la función judicial en el m. p. *Causas matrimonia-*

*les* está en evidente contradicción con la doctrina acerca de la igualdad radical contenida en la Const. *Lumen gentium*. Es evidente, en efecto, que el m. p. no considera que para ejercer funciones judiciales en la Iglesia sea necesario haber recibido el Sacramento del Orden<sup>4</sup>; en caso contrario no tendría sentido admitir a los laicos varones al desempeño de estas funciones. Por tanto, la distinción entre varones y mujeres, a estos efectos, atenta al principio de igualdad<sup>5</sup>.

Esta contradicción entre la Const. *Lumen gentium* y el m. p. *Causas matrimoniales* plantea un interesante problema canónico; a saber: ¿el requisito de ser varón establecido en los nn. V, § 1 y VI del citado m. p. puede considerarse vigente, por estar reco-

dignitas membrorum ex eorum in Christo regeneratione, communis filiorum gratia, communis ad perfectionem vocatio, una salus, una spes indivisae caritas. Nulla igitur in Christo et in Ecclesia inaequalitas, spectata stirpe vel natione, condicione sociali vel sexu, quia non est Iudaeus neque Graecus: non est servus neque liber: non est masculus neque femina. Omnes enim vos "unus" estis in Christo Iesu (Gal. 3, 28 gr.; cfr. Col. 3, 11)" (Const. *Lumen gentium*, n. 32).

2. "Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant" (Const. *Lumen gentium*, n. 10).

3. "Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, mysteriorum dispensatores et pastores pro aliis constituuntur, vera tamen inter omnes viget aequalitas quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus communem circa aedificationem Corporis Christi" (Const. *Lumen gentium*, n. 32).

4. No creo, por otra parte, que existan razones para dudar de la capacidad de los laicos para cumplir funciones judiciales en la Iglesia. Me he ocupado de la cuestión, teniendo en cuenta el tema de los fundamentos sacramentales de la organización oficial de la Iglesia, en *Los derechos del laico en la Iglesia*, en "Concilium", n.º 68 (septiembre-octubre 1971), en la edición castellana, pp. 278-282. Trato del tema con

mayor extensión en *Los laicos*, trabajo próximo a aparecer en las Actas del Congreso Internacional de Derecho Canónico celebrado en Roma en enero de 1970.

5. No es éste el único punto en el que las disposiciones del citado m. p. aparecen en contraste con el principio de igualdad. En el n. VI se excluye también a las mujeres de las funciones de asesores y auditores de los Tribunales.

Por otra parte, admitido que los laicos pueden ser jueces, lo lógico hubiera sido que el m. p. estableciera los requisitos de idoneidad para la función judicial prescindiendo de la condición clerical o laical de los candidatos. Por el contrario, el n. V, § 1, exige mayoría de jueces clérigos en el Tribunal, sin que pueda entenderse la razón de esta norma, difícilmente explicable si no se piensa que la condición de clérigo inspira una mayor confianza.

El n. VII establece que las personas que se escojan para las funciones relacionadas con las causas matrimoniales "fulgeant catholica fide et bonis moribus ac simul iuris canonici scientia", norma oportunísima, pero que el m. p. refiere en exclusiva a los laicos, como si la condición clerical asegurara la fe, las buenas costumbres y el conocimiento del Derecho Canónico.

En el mismo número, tratando de la selección de los jueces, establece el siguiente criterio: "ii praeferantur qui etiam consuetudinem fori habeant". Al preferirse la experiencia a la formación doctrinal, se es-

gido en una norma legislativa; o debe estimarse desprovisto de todo valor, en cuanto que contrario a los principios fundamentales de la Constitución de la Iglesia, explícitamente declarados en la constitución conciliar?

Como es sabido, en el Derecho Canónico vigente, al no estar recogido el principio de la jerarquía de normas, desde un punto de vista *formal* habría que atribuir la misma eficacia a ambos documentos. Uno y otro han sido legítimamente promulgados<sup>6</sup> y tanto los actos conciliares (refrendados por el Romano Pontífice), como las disposiciones que el Romano Pontífice dicta en virtud de su primado, tienen plena eficacia obligatoria; no es posible, por tanto, esta-

blecer una prioridad entre ellos. Si tuviéramos en cuenta sólo este aspecto de la cuestión, la solución sería clara: el m. p., norma posterior a la *Lumen gentium*, dictada por el Romano Pontífice en el ejercicio de su supremo poder legislativo, introduciría una excepción a lo que se dice en el n. 32 de la Constitución conciliar, puesto que «lex posterior, a competentibus auctoritate lata, obrogat priori»<sup>7</sup>.

Esta solución sería, sin embargo, excesivamente formalista. Aunque en Derecho Canónico no disponemos aún de criterios claros en materia de jerarquía de normas, es evidente que en razón de su contenido, no todas las leyes de la Iglesia tienen un mismo valor<sup>8</sup>. El principio de igualdad radical no

tablece un criterio que puede llevar a desechar a un gran especialista en Derecho Canónico en favor de quien hubiera llevado a cabo durante años una labor forense mediocre. Se trata de un criterio de selección técnicamente muy discutible; pero, desde el punto de vista de la igualdad jurídica, irreprochable. Sin embargo, puede ser revelador de una mentalidad de desconfianza hacia los laicos, si se tiene en cuenta que sólo a ellos parece ser aplicable, puesto que nada se dice al respecto de los candidatos a jueces que sean clérigos.

6. No puede olvidarse que la Const. *Lumen gentium* se cierra, como es usual, con esta impresionante fórmula: "Haec omnia et singula quae in hac Constitutione dogmatica edicta sunt placuerunt Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, decernimus ac statuimus et quae ita synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus". Por otra parte, ha sido publicada en A.A.S., 58 (1965), pp. 5-71. Desde el punto de vista de los requisitos formales no parece, por tanto, que pueda dudarse de que está vigente en el ordenamiento canónico todo aquello de su contenido que *ratione materiae* sea calificable de norma jurídica (cfr. cc. 8, § 1, 9 y 227 del *Codex iuris canonici*).

La doctrina canónica se ha ocupado del problema de la eficacia normativa de los documentos conciliares. GISMONDI, tras afirmar que las disposiciones conciliares "sono state adunque emanate dal Concilio con l'approvazione del Pontifice ed hanno quindi la vis

*definitiva obligandi* ai sensi del c. 227", siendo por tanto "leggi emanate dal Concilio e confermate e promulgate dal Pontefice", añade: "Riconosciuto il carattere normativo delle disposizioni conciliari ci si domanda se esse siano d'immediata applicazione per tutti i soggetti dell'ordinamento della Chiesa, ovvero se costituiscano principi di ordine pubblico che si impongono agli organi che devono applicare o emanare la legge, ovvero se siano norme meramente programmatiche o direttive che non si rivolgono a tutti i *subditi canonici* ma solo agli organi legislativi". "E' noto —añade— che anche le norme precettive possono essere suscettibili di immediata applicazione quando sia materialmente necessaria, per la loro concreta attuazione, l'emanazione di ulteriori norme strumentali" (*Lezioni di diritto canonico sui principi conciliari*, 2.<sup>a</sup> ristampa integrata, Roma 1970, pp. 38-39). Vid. también: G. LO CASTRO, *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di Diritto Canonico* (Milano 1970), espec., pp. 217-295.

7. C. 22.

8. "E' possibile, per tanto —entiende LO CASTRO—, affermare una gerarchia degli atti normativi e, nella specie, delle deliberazioni conciliari, con specifico riferimento al loro contenuto; tale gerarchia, desunta dall'atto, si fonderebbe pur sempre sui soggetti di produzione: Dio, se l'atto dichiara leggi divine; nelle altre ipotesi, il sommo pontefice ed il collegio episcopale, i vescovi, ecc., con forza decrescente" (*La qualificazione...*, cit., p. 289).

ha sido *establecido* por el Concilio Vaticano II; lo que el Concilio Ecuménico ha hecho es declarar que el principio de igualdad rige en la Iglesia, porque corresponde a la imagen que de ella se nos da en la Sagrada Escritura, porque así lo ha querido el propio Cristo fundador; por tanto, estamos ante un principio de Derecho divino<sup>9</sup>, *canonizado*, si queremos usar esa expresión tan clásica, o *positivizado*, como en su fino análisis del problema preferiría decir Hervada<sup>10</sup>. Vista así la cuestión, es evidente que el m. p., al establecer un mero requisito de derecho humano, no puede introducir una excepción al principio de igualdad radical<sup>11</sup>.

9. No me parece que pueda dudarse de esta afirmación si se tienen en cuenta, tanto las fuentes bíblicas del magisterio conciliar, como la conexión de este principio con los efectos del bautismo y, en definitiva, con las bases sacramentales de la estructura orgánica de la Iglesia. Hervada parece dar por supuesto que estamos ante un principio de Derecho divino, cuando lo utiliza como elemento básico para construir todo un planteamiento de la condición constitucional de los fieles, "que es común a todos ellos y anterior a cualquier diferenciación" (J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona 1970, p. 268) y "está compuesta por un núcleo inmutable que, de acuerdo con el grado de profundización que en cada momento se tenga de la voluntad fundacional de Cristo y con las condiciones de la época, se explicita en una concreta conformación histórica (factor histórico)". "El núcleo esencial —de Derecho divino— está representado —según el citado autor— por el hecho de la vinculación del fiel a la Iglesia, por la dignidad, la libertad y la responsabilidad como condición suya y por sus constantes e inmutables explicitaciones; ..." (ibid., pp. 269-270; vid. también, pp. 34-37). Menos rotunda es la postura de GISMONDI para quien "il principio di uguaglianza riguardo alla dignità ed all'azione comune contenuto in un solenne atto normativo, sia pure programmatico o direttivo, contiene il riconoscimento di determinati interessi che fino ad ora non avevano avuto alcuna rilevanza nell'ambito dell'ordinamento canonico". Y añade: "Al legislatore ordinario spettará di applicare in concreto il principio dell'uguaglianza..." (Lezioni, cit., pp. 42-43). Lo CASTRO entiende que la igualdad "è il presupposto giuridico e non solo dottrinale sul quale dovrà essere

¿Qué solución técnica cabe, mientras no se proceda a la derogación del m. p., en relación con esta contradicción entre Constitución de la Iglesia y Derecho positivo? Es evidente que ningún órgano eclesiástico podría hoy emitir directamente un juicio sobre la constitucionalidad del m. p., ni existe cauce alguno para plantearla; en definitiva, es al Romano Pontífice a quien compete —también en virtud de la Constitución divina de la Iglesia— establecer el principio de jerarquía de normas y el modo concreto de apreciar las nulidades de disposiciones que se derivaran de su aplicación<sup>12</sup>. De un modo indirecto sí podría, sin embargo, plan-

costruito lo statuto giuridico comune a tutti i fedeli" (*La qualificazione...*, cit., p. 283).

10. Cfr. HERVADA-LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, I, cit., pp. 45-56.

11. Según el n. 33 de la Const. *Lumen gentium*, los laicos, además del apostolado que les es propio "attitudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem spiritualem exercent, ab Hierarchia adsumantur". Una interpretación literal y restrictiva de este texto podría llevar a la conclusión de que los laicos no tienen derecho a los oficios eclesiásticos, sino sólo la aptitud para ser llamados a ellos; la jerarquía, por tanto, podría establecer los requisitos que considerara oportunos en cada caso. Por lo que se refiere al m. p. "Causas matrimoniales", estaríamos ante un acto de la jerarquía, en el que la admisión de los laicos al oficio de juez se condicionaría a que concurran en los candidatos determinados requisitos, entre los cuales el sexo masculino. No creo, sin embargo, que pueda aceptarse este razonamiento. Evidentemente, los laicos no tienen derecho a ser jueces, si no reúnen los requisitos que legítimamente se establecen; sin embargo, las normas canónicas, al regular los requisitos de idoneidad, no pueden exigir cualidades que, por ser ajenas a la naturaleza de la función judicial, atenten contra el principio de igualdad.

12. Acerca de la posibilidad de establecer una jerarquía de normas en el ordenamiento canónico y de su congruencia con la fe de la Iglesia acerca del Primado del Romano Pontífice, vid.: J. HERVADA, *El Romano Pontífice*, en "El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia" (Pamplona 1971), pp. 164-179. Vid. también: P. LOMBARDÍA, *Panorámica del proyecto*, ibid., especialmente pp. 94-100.

tearse la cuestión. Supongamos que una Conferencia Episcopal permitiera —a tenor del n. V, § 1 del m. p.— la constitución de un Tribunal para juzgar causas matrimoniales, constituido por dos clérigos y una mujer que tuviera cuantos requisitos de idoneidad se establecen en el n. VII, excepto el sexo. Una vez que este Tribunal hubiera actuado podrían plantearse dudas acerca de la validez de sus sentencias, cuestión acerca de la cual el órgano competente tendría el deber de pronunciarse. Pienso que, en esta sede, incluso *de iure condito*, sería perfectamente correcta una decisión que

apreciara la validez de las sentencias matrimoniales pese a la infracción del m. p., basada en la doctrina de la *Lumen gentium* acerca de la igualdad radical.

Me parece que para evitar este tipo de cuestiones es imprescindible una Ley fundamental que regule con claridad la jerarquía de fuentes en el ordenamiento de la Iglesia. De este modo se aseguraría aún más rotundamente el Primado del Romano Pontífice, se fomentaría el respeto a la ley en la Iglesia y se favorecería de manera más clara el orden social justo del Pueblo de Dios.

## Mariano López Alarcón

*Universidad de Murcia*

1. Naturalmente que no cabe establecer entre los laicos ninguna diferencia en su condición radical de fiel; pero, el contenido del estatuto personal del laico, en cuanto tal, sin establecer diferencias esenciales entre ellos, sí que debería tener en cuenta, en lo accidental, una cierta especialización y adaptación respecto de la mujer, teniendo en cuenta las exigencias naturales y sociales de la feminidad. Lo mejor sería encomendar al Derecho particular estas matizaciones, según la condición de la mujer en los diversos países y para procurar su dignificación y elevación en donde estuviere infravalorada.

Especial interés reviste considerar la participación de la mujer en la función públi-

ca. En la Iglesia, como ha hecho notar el Card. Flahiff en el Sínodo Episcopal recientemente clausurado, si bien el Concilio Vaticano II afirmó la exclusión de toda discriminación con respecto a la mujer, hasta ahora nada en concreto se ha hecho verdaderamente importante en tal sentido y considera necesario afrontar este problema de la participación de las mujeres, ya estableciendo unos ministerios adaptados a las posibilidades de la mujer y a sus cometidos en la Iglesia y en la sociedad, o bien adaptando algunos ministerios ya existentes (*L'Osservatore Romano*, Núm. 235, 11-12 octubre).

Para ello no hay obstáculos teológicos ni jurídicos. Schmalzgrueber se planteaba la cuestión de si el laico puede conocer de las causas espirituales y respondía que no es inhábil por derecho divino, siempre que actuara en nombre ajeno (en virtud de potes-

tad delegada) y no en el propio (lib. II, Tit. I, núm. 56) y la prescripción del CIC de que solamente los clérigos pueden obtener la potestad de jurisdicción eclesiástica (can. 118) siguió interpretándose en el sentido de que la incapacidad de los laicos es de derecho eclesiástico y pueden ser comisionados para el ejercicio de dicho poder. Por fin, la Constitución *Lumen gentium* (núm. 33) establece que los laicos son aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos, ordenados a un fin espiritual y la doctrina (Lombardía, Hervada, Souto) se ha encargado de precisar que hay *munera* que los laicos pueden desempeñar en la organización eclesiástica en cuanto no sean necesarias para su ejercicio facultades derivadas del sacerdocio ministerial.

Abierto el camino de los laicos hacia los servicios públicos en la Iglesia, tampoco hay razón para hacer discriminaciones entre el hombre y la mujer. Insistimos en que es meramente accidental y que debe quedar a la prudencia del legislador particular la regulación concreta de la participación de la mujer en el desempeño de dichos servicios.

2. La participación de los laicos en los órganos judiciales de la Iglesia viene justificada por lo que decía al contestar la pregunta anterior.

Sin embargo, la especialidad de la función judicial y las severas cualidades exigidas al juez, retrasó el acceso de la mujer a la magistratura en la sociedad civil. El Maestro Castán escribía en el año 1955 que, si bien el elemento subjetivo de la justicia existe en la mujer y más pujante todavía que en el varón, la incorporación de la mujer a las delicadas tareas de la Administración de la

Justicia ha de ser una última fase —que no sería prudente anticipar— en la evolución de las actividades femeninas (*La condición social y jurídica de las mujeres*, págs. 39 y 89).

La aceleración del proceso hacia la igualdad jurídica de la mujer y del hombre ha sido tan espectacular en estos últimos años que esa última fase ha sido alcanzada ya en numerosos países. Una prueba de ello la tenemos en España, en donde la ley de 22 de julio de 1961, sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer, prohibió su acceso a los cargos de Magistrados, Jueces y Fiscales, y sólo cinco años después, por ley de 28 de diciembre de 1966, se derogó dicha prohibición, razonándose en el preámbulo que la excepción había respondido, no a la idea de una falta de capacidad o responsabilidad de la mujer para desempeñar tales cargos, sino más bien a una protección de sus sentimientos ante determinadas situaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles.

En la Iglesia, la figura del Juez eclesiástico debe caracterizarse, según el pensamiento de Pablo VI, por aplicar, no la ley por la ley, no el juicio por el juicio, sino ley y juicio al servicio de la verdad, de la justicia, de la paciencia y de la caridad (Alocución al Tribunal de la Sagrada Rota Romana, 28 enero 1971, AAS, LXIII, pág. 140). Estas cualidades se avienen con la condición natural de la mujer, que en el tratamiento de ciertas causas, como las matrimoniales, aportaría su inédito punto de vista que ha de ser muy interesante y constructivo, y toda clase de procesos se verían enriquecidos por su especial sensibilidad para captar los mensajes que de lo profundo del alma humana llegan a los jueces y les iluminan pa-



ra la búsqueda de la justa solución de los conflictos.

Si la mujer, en cada lugar y circunstancia, ha de adscribirse a ciertos Tribunales o causas y excluírsele de otros, es asunto que

la autoridad eclesiástica particular habría de decidir teniendo en cuenta el grado de evolución social de la mujer, su preparación y la actitud ante ella en la comunidad eclesial.

## Víctor de Reina

*Universidad Autónoma de Barcelona*

1. No veo por qué se haya de establecer

diferencias jurídicas entre unos y otros en estas materias.

2. Me parece injusto. Aparte de eso no les vendría mal a los problemas matrimoniales una mayor intervención de la mujer en la resolución de los mismos.

## José L. Santos

*Universidad de Granada*

1. Es claro que el cristiano recibe en el bautismo una determinada personalidad en la Iglesia y por tanto se hace titular de derechos y obligaciones. También es claro que la cualidad de miembro de pleno derecho, con la triple vinculación de fe, sacramentos y obediencia, inserta a todo cristiano en toda la vitalidad de la Iglesia en cuanto Cuerpo Místico. Esta participación viva y activa en este organismo espiritual y sobrenatural ha sido luminosamente expuesta por el Concilio Vaticano II en la constitución «Lumen Gentium» y antes por Pío XII en

la encíclica «Mystici Corporis», siguiéndose en uno y otro caso la espléndida descripción de San Pablo en la carta a los Efesios.

Pero ninguno de estos textos establecen ni pueden establecer diferencias por mera razón de raza, lengua, sexo, etc., sino más bien subrayan lo contrario. La tendencia de la Iglesia, cada vez más acentuada, como aparecía últimamente en el criticado proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia, es de resaltar la presencia activa de los fieles, de todos los fieles, sin discriminaciones y según su propia idoneidad, en la misión de la Iglesia. Por tanto, entiendo que el cristiano, en cuanto tal y dentro de las normales exigencias propias de cada caso, está capacitado no sólo para derechos y deberes en la



Iglesia, sino también para funciones comunes eclesiásticas, que no exijan cualidad específica; y que no se ve razón especial para diferencias por motivo del sexo, como tampoco las habría por motivo de raza, etc. Es más no sólo se trata de una aptitud, sino que además hay una responsabilidad en todo cristiano de colaborar dentro de sus posibilidades en la tarea de la Iglesia.

2. Por lo dicho antes estimo que la mujer puede y debe tener opción, en condiciones no inferiores a las del varón, a las funciones judiciales de la Iglesia, siempre naturalmente dentro de la idoneidad propia exigida por la función. El Motu proprio sobre las causas matrimoniales ha abierto una puerta en este sentido, pero con discriminación entre varón y mujer. Sus restricciones en este tema suponen no escasa presión histórica y de mentalidad en una Iglesia, que, por otra parte, trata de promover la igualdad de derechos y la eliminación de toda

discriminación, a tono con su propio mensaje y con la gran sensibilidad contemporánea. No se sabe a punto fijo qué motivos concretos en la Iglesia inducen a esta especie de contradicción entre igualdad de derechos y limitación de los de la mujer en asuntos que no presuponen, como éste de la justicia, mayor idoneidad por razón del sexo. Por otra parte hay que pensar que en el tema matrimonial, y por tanto en las causas matrimoniales, alguna cosa podrán decir quienes conocen por dentro los problemas de la vida matrimonial; reflexión que ha llevado a algunos a sugerir que en causas matrimoniales los tribunales eclesiásticos dispongan para sus deliberaciones de grupos laicos, hombres y mujeres casados e idóneos; el m. p. sobre causas matrimoniales, aunque con timidez, ha dado unos primeros pasos. La mujer, por otra parte, está siendo introducida también por la Iglesia en recientes organismos eclesiásticos de ámbito universal.